

# Chile

## Pinochet sigue marcando

Matilde Wolter

Un cuarto de siglo después del golpe militar que lo instaló en el poder y cumplidos los 83 años, la figura del ex-dictador chileno y general en retiro Augusto Pinochet, por voluntad propia o ajena sigue dominando la política chilena, que se prepara para un agitado año electoral. Su detención en Londres, a raíz de procesos seguidos en España por violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el régimen dictatorial, dejó en claro la polarización que todavía existe en el país respecto de su figura.

La acción de la justicia británica creó el conflicto político más difícil de la transición, marcado por problemas al interior del gabinete, divisiones en la coalición de Gobierno y un endurecimiento sin precedentes de la derecha, que volvió a salir a protestar a las calles por primera vez desde 1988, cuando perdió el plebiscito que despejó el camino hacia la democracia. El arresto de Pinochet cerró también un año signado por su presencia en la política chilena. Primero, con su paso a retiro el 10 de marzo de 1998 y la entrega de la comandancia del Ejército, a lo que le siguió su asunción como senador vitalicio. Enseguida el país se agitó por una acusación constitucional en su contra que pretendió, sin éxito, cerrarle el camino al Parlamento —clausurado por él mismo en septiembre de 1973. Justamente, a ello se sumó la abolición del feriado del 11 de Septiembre (fecha del golpe militar), gracias a una decisión que lideró personalmente y que negoció con el presidente del Senado, el demócrata Andrés Zaldívar.

En este clima, y cuando los meses transcurridos por el nuevo senador fueron tormentosos en los primeros días mientras enfrentó la acusación constitucional de la que salió airoso —en gran parte por la actitud del Gobierno, que por razones similares a las esgrimidas después frente a su arresto se opuso al libelo—, Pinochet se sentía parte de la transición y hasta conciliador. Tal vez ese tranquilo pasar le hizo caer en un exceso de confianza, que lo llevó a viajar a Europa para operarse a comienzos de octubre de una hernia discal

---

MATILDE WOLTER: periodista chilena.

**Palabras clave:** situación política, elecciones, Pinochet, Chile.

que complicaba su salud. Nadie pudo adivinar que esta decisión podría desatar una secuela de hechos que se venían gestando en España desde hacía dos años y que desembocarían a mediados de ese mes en su detención mientras se recuperaba en la elegante London Clinic.

Ese 16 de octubre un país perplejo presenció cómo un leve cambio en el juego conseguía descolocar las posiciones que las diversas fuerzas políticas habían adoptado en los últimos años, en un clima de calma y unidad aparente que hacía presagiar el tan ansiado término de la transición. Un error de cálculo del ex-dictador y de sus asesores bastó para que la transición chilena a la democracia desnudara su fragilidad ante el mundo. Mientras las pasiones se desataban, el Ejecutivo encabezado por el presidente democristiano, Eduardo Frei, dejó de lado sentimientos y optó por respaldar, por «razones de Estado», al anciano general bajo la fórmula de «defender principios y no personas».

### **Gobierno: racionalidad y ponderación para sortear presiones**

Presionado desde un comienzo por los organismos de derechos humanos, familiares de las víctimas, el Ejército, la derecha e incluso por los socialdemócratas de la alianza que lo sustenta, sin duda el Gobierno ha transitado estos meses por momentos difíciles e ingratos. Frente a una situación que no estaba en ninguna previsión, y que se presentó como desencadenante de una crisis, el Gobierno ha mantenido una línea de ponderación y racionalidad que no puede ser desmentida. La tarea no ha sido fácil para el presidente Frei, que se siente obligado a defender al ex-dictador, tarea que jamás previó ni quiso liderar. Para el ejecutivo chileno la detención de Pinochet, que viajaba con pasaporte diplomático, es «ilegal», y atenta contra la soberanía del país, que niega jurisdicción a tribunales extranjeros para juzgar hechos ocurridos en Chile. En concordancia con esta tesis, las autoridades gubernamentales han asegurado en Santiago, Londres y Madrid que Pinochet puede ser juzgado y condenado en Chile, donde se incoan en su contra alrededor de quince querellas criminales.

Esta postura, apoyada por la derecha, las fuerzas armadas y la DC (Democracia Cristiana) –partido mayoritario de la coalición oficialista–, ha sido rechazada por los sectores ligados a los derechos humanos, a la izquierda extraparlamentaria, pero también y con matices, por el PPD (Partido por la Democracia) y el PS (Partido Socialista) –el llamado «centro progresista» de la Concertación. Las diferencias surgieron desde la emotividad el primer día, cuando los socialistas celebraron la detención de Pinochet y reconocieron la competencia de los tribunales internacionales, a lo que siguió el viaje de destacados parlamentarios a Londres para brindar testimonio, entre ellos Isabel Allende –hija del fallecido presidente Salvador Allende– y Juan Pablo Letelier –hijo del ex-canciller Orlando Letelier, asesinado en Washington por la siniestra DINA (la policía secreta pinochetista) en septiembre de 1976.

Tras una guerrilla verbal y de recriminaciones mutuas entre democristianos y socialistas, donde no faltó la pasión de quienes esgrimían su condición de víctimas directas de la represión dictatorial y de quienes exigían lealtad al Gobierno, y cuando ya se habían suspendido por varias semanas las reuniones de la directiva de la alianza, el presidente Frei decidió «ordenar la casa». Al promediar diciembre, en reunión con las directivas de los cuatro partidos que lo sustentan, Frei pidió un claro y explícito apoyo a la gestión gubernamental en torno del caso Pinochet, e hizo ver su preocupación por la proyección de una imagen «de falta de unidad y de conflictos sin resolución». También el mandatario llamó a hacer todos los esfuerzos por impedir los intentos de la derecha política de dividir a la Concertación, para lo cual ha usado diversas tácticas, desde llamar a la formación de un «polo de unidad nacional» sin socialistas hasta levantar candidatos-fantasma para la contienda presidencial de diciembre de 1999.

En la reunión, Frei le dio también seguridades a los socialistas de que la participación chilena en la vista de apelación sobre la inmunidad soberana de Pinochet que se discutía en la Cámara de los Lores, no sería jamás para defender su inmunidad en cuanto ex-jefe de Estado. De este encuentro y de las declaraciones oficiales quedó claro que el Gobierno quiere a Pinochet de vuelta lo antes posible para dar estabilidad y gobernabilidad al último año que le resta al presidente Frei. El mandatario aspira a una Concertación unida, lo que le permitiría reforzar las gestiones políticas que adelanta La Moneda para lograr el retorno de Pinochet, en el caso de que los Lores decidan que debe quedarse en Londres.

Al mismo tiempo, para los socialistas el regreso de Pinochet se hace cada vez más necesario a la luz de la coyuntura electoral con que debutó 1999, año en el que piensan llevar a la presidencia a Ricardo Lagos, favorito en todas las encuestas de opinión. Los «cerebros» de la campaña de Lagos temen que una prolongación de la estadía pinochetista en Londres convierta al ex-dictador en símbolo, poniéndose entonces las cosas malas para el ex-ministro de Obras Públicas, quien ha reiterado que el caso Pinochet «es judicial», defendiendo la tesis de que puede ser juzgado en Chile.

Así, la unidad de propósitos entre socialistas y Gobierno en torno del rápido regreso del general y la unidad de la Concertación, junto a la intensificación de las campañas de Lagos y Zaldívar para las primarias de la Concertación, marcarán los primeros meses del año, que coinciden con la llamada segunda etapa del caso Pinochet. En este contexto, el debate se ha ido concentrando alrededor de si podrá ser juzgado en Chile, si habrá solución a los problemas pendientes de derechos humanos y acerca del futuro de la transición de cara a los comicios de 1999. En otro plano, más allá del factor Pinochet, a comienzos de año la agenda política presenta las características previsibles de cualquier proceso de cierre de un período gubernamental: el relevamiento de las metas y logros alcanzados, un afinamiento de las tareas pendientes y posibles de realizar y una evaluación crítica de los desafíos por venir.

## **Hay que reinventar la transición**

La detención de Pinochet y su posterior evolución ha generado en el país una avalancha de reacciones que nada tiene que ver con ese país frío y racional que como imagen oficial, desde que se instaló la democracia, han tratado de proyectar tanto el Gobierno como los actores públicos y privados. El «Chile posdetención» desafina con el país gélido y razonable del ténpano de la Expo-Barcelona. No sintoniza con la visión de un juego de actores políticos y económicos proyectados al futuro y tampoco con una ejemplar y ordenada transición a la democracia dotada de un consolidado sistema de reglas del juego ampliamente respetado por todos los actores. Por el contrario, la pasión y la emotividad ha sido, de lejos, el elemento que lo ha caracterizado todo en estos últimos meses.

En este contexto, algunos analistas han postulado «reinventar otra transición» que termine con un Gobierno tutelado por las fuerzas armadas y donde las discusiones se den de «cara al país» y no existan pactos secretos ni consensos susurrados. «Necesitamos un sinceramiento muy grande», señaló sobre el tema el director del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, Ricardo Israel: el país «está preparado para la verdad» —dijo—, para hablar y debatir abiertamente sobre todos los temas y que ya «no hay miedo al castigo». Para Israel, la opción que tome Chile este año es muy similar a la de 1988: «confrontación o un nuevo entendimiento».

## **Derecha: un caso clínico de regresión al pinochetismo**

Para los científicos y analistas políticos, en tanto, una de las sorpresas ha sido el potencial de regresión al pinochetismo de la oposición de derecha, integrada por el PRN (Partido Renovación Nacional) y la ultraconservadora UDI (Unión Demócrata Independiente). Israel está impresionado de cómo con su detención Pinochet ha recuperado poder en ese sector, que parecía en gran medida independizado de su tutela. «Era una figura cuyo poder se iba desvaneciendo y de repente viene una pinochetización del país», destacó Israel para agregar que ha quedado en evidencia que «en la derecha no hay un ala militar y una liberal» sino un partido pinochetista.

Para el analista Mladen Yopo, con la detención de Pinochet en Londres «la derecha dejó caer su máscara modernizadora y democrática, para mostrar lo peor de la carga simbólico-argumental del régimen militar». El arresto fue acogido con rabia por ese sector político, que desarrolló una fuerte campaña de movilización en pago por su lealtad a la figura del general retirado. Interpretando su detención como «un atentado a la soberanía nacional», los dirigentes derechistas han presionado día a día al Gobierno de Frei para que defienda a Pinochet a toda costa, con peticiones que han llegado a incluir la ruptura de relaciones diplomáticas con España y el Reino Unido, sus principales aliados en Europa. A esto se sumaron históricos llamados a «hacerles la vida imposible» a ingleses y españoles en Chile, violentas manifestaciones

callejeras, quema de banderas y acciones de hostigamientos emprendidas por los alcaldes derechistas de las comunas donde estaban las sedes diplomáticas.

«La derecha ha sido bastante inepta y muy mal liderada en todo este conflicto», afirmó uno de los analistas políticos más prestigiosos del país, Oscar Godoy, de tendencia liberal y director del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile. «La derecha ha intentado buscar en Chile al responsable de lo que estaba sucediendo en Londres y ha sido incapaz de ponerse en el lugar del Gobierno inglés para intentar reconocer las razones por haber procedido como lo estaba haciendo», dijo Godoy en alusión a la tesis de ese sector de que Pinochet era víctima de «una conspiración socialista manejada desde Chile».

Para Yopo, la detención de Pinochet le llegó como «regalo» a la derecha y le sirvió «para articularse por primera vez en estos nueve años, en los que les ha ido tan mal electoralmente, en pos de un interés y una figura simbólica común». Agrega que bajo el alero del general decidieron salvar el modelo y convertir la derrota en victoria mediante la separación del Pinochet biológico del histórico. Así surgió la tesis de que la derecha ya le dio la espalda a Pinochet y lo prefiere en Londres de símbolo que en Santiago oscureciendo la campaña electoral. Destacados personeros de ese sector, luego de peregrinaciones a Londres y de la rabia, cambiaron de estrategia y declaraciones, sobre todo a la luz de las noticias desde la capital británica que auguraban que el asunto iba para largo. «Ya no es el momento de llorar sobre la leche derramada», dijo Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes y único abanderado presidencial que quedó en el sector tras la renuncia de Sebastián Piñera. «Aquí hay un nuevo escenario –añadió Lavín–, el país tiene que salir adelante y al mismo tiempo la gente tiene que tomar nota de quiénes son los que estuvieron realmente por restablecer la soberanía nacional», dijo el candidato que no ha logrado remontar las intenciones de voto en las encuestas y se mantiene en un 19%, frente al 37% de Lagos.

El cambio de estrategia también se notó en los comportamientos de los adherentes de Pinochet, que ya en diciembre cambiaron las banderas y las protestas frente a las embajadas por la opción de estar lo más cerca posible de su líder, lo que auspició abarrotados «charters» a Londres. Paralelamente, la dirigencia política se volcó hacia los comicios presidenciales con el objetivo de evitar que el próximo presidente de Chile sea el socialdemócrata Lagos. Según declaró el senador de la UDI, Hernán Larraín, los chilenos deben «sancionar a la máxima figura de los socialistas, Lagos, por la responsabilidad de ese bloque en los agravios» que ha recibido la «dignidad» de Chile a raíz del arresto de Pinochet.

Pero el clima político fomentado por la derecha fue también aprovechado por voces que, en contra de la opinión mayoritaria del país, han hablado de «supuestos peligros» para la democracia si Pinochet no vuelve pronto. «Si no

liberan a mi general puede ocurrir cualquier cosa», dijo el ex-vicecomandante en jefe del Ejército, general en retiro Guillermo Garín, que había tenido fama de «moderado». Sin embargo, la mayoría de los chilenos no coincide con él y, según una encuesta difundida en diciembre, no solo considera que el arresto de Pinochet no les afecta en nada (71%), sino que el 66% cree que no hay ningún riesgo para la democracia y más del 70% lo considera culpable de violaciones a los derechos humanos aunque la mayoría prefiere que sea juzgado en Chile y no en el extranjero. «Ni la estabilidad de las instituciones, ni la soberanía nacional, ni mucho menos el resultado final de la transición se pueden ver afectadas por el destino de una persona, por mucha relevancia que ésta pueda tener», sostuvo Godoy al comentar declaraciones desde los sectores más radicales del pinochetismo.

### **Ejército, una asignatura pendiente**

El saldo más negativo del «caso Pinochet» es el tipo de relación que se instaló entre unas fuerzas armadas corporativizadas y el poder civil. El régimen chileno se caracteriza por la autonomía política de que hacen gala las fuerzas armadas. Las cuatro reuniones por el caso Pinochet del heredado Cosena (Consejo de Seguridad Nacional), consagraron a esta instancia como un espacio de cogobierno sobre materias importantes en la gestión del Estado, echando atrás toda la estrategia de los gobiernos de la Concertación de rutinizarlo apenas como un instrumento de consulta. El impacto del tema en esa rama castrense ha sido manejado con bisturí por el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, quien ha debido aquietar un preocupante malestar en las filas y se ha reunido en varias ocasiones con sus generales sin escatimar tiempo ni disposición para explicar a sus subordinados los detalles de «la batalla de Londres».

Desde las filas de los ex-colaboradores más cercanos a Pinochet en el Ejército, tampoco ha habido colaboración con el general Izurieta en materia de apaciguar ánimos. Así, el general Garín agregaba que si Pinochet era extraditado a España, los militares «no lo aceptarán sin chistar. ... No quiero imaginar un golpe de Estado, pero realmente, a los comandantes en jefe se les haría muy difícil la situación en los cuarteles», subrayó.

El académico Godoy comparte que la situación de Pinochet «es un enorme desafío» para Izurieta, «prisionero de las circunstancias», y que «no pueden descartarse actos individuales de alta irracionalidad». No obstante, considera que el mayor peligro, si se aprueba la extradición, se puede producir «en estamentos inorgánicos de la sociedad». A su juicio «no se pueden descartar los crímenes políticos o los actos terroristas». También, en su opinión la institucionalidad chilena se encuentra intervenida por elementos que no pertenecen a la doctrina constitucional tradicional en el país. Ello se expresa en instituciones como los senadores designados, el Cosena, la designación de los comandantes en jefe, las leyes orgánicas que implican quórumes muy especiales, entre otras instancias que la Concertación no ha podido eliminar.

En efecto, todos los esfuerzos destinados a normalizar esta situación fueron bloqueados en el Parlamento por la derecha, y la actitud de las fuerzas armadas, especialmente del Ejército, fue desarrollar acciones simbólicas de fuerza (como lo fueron los llamados ejercicio de enlace y boinazo), y fortalecer su poder corporativo y su autonomía ante el poder civil. Al término de dos gobiernos de la Concertación, la conclusión es que la situación no ha variado, y la detención de Pinochet sirvió para que las fuerzas armadas y los Carabineros (policía militarizada) cerraran filas y transformaran el Cosena en un espacio de cogobierno sobre materias importantes en la gestión del Estado. La imagen de los cuatro jefes militares llegando al mismo tiempo al palacio presidencial de La Moneda a una sesión del Cosena el 11 de diciembre, donde se discutiría el curso político de las acciones gubernamentales frente al caso Pinochet, tienen un peso simbólico demasiado grande respecto del papel que estas fuerzas armadas juegan en Chile. Indudablemente con este «caso» la agenda política del sector quedó cancelada.

### **Derechos humanos: la fuerza de la memoria y del no olvido**

En el terreno del derecho internacional y los derechos humanos, los efectos del «arresto del siglo» no son menos impactantes, sobre todo entre los muchos ex-dictadores del planeta que ya no duermen tranquilos. El mensaje, sea cual sea el resultado de las audiencias en Londres, es que las cosas han cambiado. La lenta expansión del derecho internacional les ha dejado pocos lugares donde refugiarse a los transgresores de los derechos humanos. Pinochet, que desde que asumió el poder en 1973 tejó una intrincada red legal para protegerse, lo comprobó amargamente en su otrora querida y admirada Gran Bretaña, a la que viajaba con frecuencia desde que entregó el poder.

Es en el campo de los derechos humanos donde el caso marca una verdadera revolución, signa la transición de un sistema de derecho internacional basado en el poder de los Estados, a uno basado en el poder de las personas, mediado por Estados que en su fundamento de legitimidad deben reconocer y defender el derecho de los individuos. Pinochet marca la línea divisoria entre uno y otro. «Ni siquiera la comunidad internacional de derechos humanos imaginó alguna vez que esto iba a suceder con la figura más simbólicamente acusada de América Latina en los últimos 25 años», señalaba un comentarista norteamericano.

En Chile, en tanto, la detención de Pinochet hizo resucitar los sentimientos de miles de familiares de víctimas políticas que recelan de cualquier futuro de reconciliación mientras no se resuelvan las heridas pendientes del pasado. «En la medida que no se rectifique el pasado, éste va a pesar muy fuerte sobre el futuro», declaró el abogado José Zalaquett, integrante de la comisión que elaboró el Informe Rettig sobre violaciones a los derechos humanos en Chile. «La impunidad o la pertinacia a negarse a reconocer la verdad o a colaborar para que se conozca el paradero de los desaparecidos políticos ha

sentado una doctrina implícita en las Fuerzas Armadas de que estuvo bien o justificado secuestrar prisioneros inermes; lo fundamental es la rectificación de esa política», sentenció.

Declaraciones que coinciden con otras de importantes figuras políticas de la transición chilena como Ricardo Lagos: «Lo que está investigando el juez español es algo que perfectamente se podía haber investigado en Chile. El mundo nos está diciendo: ustedes tienen asignaturas pendientes que no las han aprobado», afirmó. La conmoción que despertó el arresto de Pinochet estremeció quizás con más fuerza a quienes vieron, por primera vez, la posibilidad de hacer justicia: «Por lo menos todavía quedan países donde los dictadores y la gente que ha cometido tantos delitos es juzgada», dijo Viviana Díaz, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Políticos, que argumenta motivos y exhibe estadísticas para no confiar en los tribunales chilenos.

Solo 19 ex-militares y miembros de la policía secreta de Pinochet han sido condenados en estos 25 años por violaciones a los derechos humanos, en 7 procesos por 11 víctimas, de las 3.197 causas documentadas en un informe de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu). Aunque todavía se siguen desenterrando restos de cuerpos que pueden corresponder a desaparecidos políticos, en Chile se pensaba que ocho años de democracia servirían para olvidar que en la mayoría de los casos relacionados con los derechos humanos se sigue esperando justicia. «La memoria se impone sobre el olvido», dijo Díaz recordando que en Chile no hay ningún condenado en casos de detenidos desaparecidos y que suman 171 los restos encontrados. La cifra total de los desaparecidos, según datos de la agrupación, suma 1.198 personas y sus autores están impunes en virtud de una ley de amnistía que dictó el régimen para autoperdonarse.

Según el balance del primer semestre de 1998 de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), en el país se mantienen 251 procesos por violaciones a los derechos humanos en tramitación en los tribunales. De éstos, 207 residen en la justicia civil y 44 en la militar, mientras hasta el momento se han presentado 34 denuncias «por denegación de justicia» contra el Estado de Chile ante organismos internacionales. Del total de las causas abiertas, sólo en el primer semestre de 1998 fueron amnistiadas o sobreseídas 11, mientras 28 tenían sobreseimiento pendiente por aplicación de la ley de amnistía. A la luz de estas cifras, se puede entender la alegría desbordada de madres, esposas, hermanas, abuelas e hijas de desaparecidos el 25 de noviembre, cuando los Lores le negaron la inmunidad soberana a Pinochet.

«No lo puedo creer, es un sueño», exclamaban algunas ancianas confiando en que Pinochet será por fin extraditado a España. Sin embargo, a la hora de colocarse en el escenario del regreso de Pinochet a Chile contestaban serenamente «nosotros seguiremos en lo que hemos estado 25 años». Es decir, pre-



sentando denuncias ante los tribunales, buscando pistas, pidiendo verdad y justicia. «No transaremos ni descansaremos jamás», afirma Díaz, cuyo padre desapareció un día de la casa. En el muro escribió su hija: Aquí vivió Víctor Díaz, dirigente sindical, «si pones el oído en las paredes, lo escucharás».

### **Elecciones: difícil debut de la campaña electoral**

En este complicado escenario político e institucional debutó la campaña electoral de los comicios de diciembre de 1999, en los que se elegirá al sucesor de Frei y tercer presidente democrático desde que Pinochet entregara el poder en marzo de 1990, y quien gobernará en el próximo milenio (2000-2006). Este año empezó nítidamente como electoral con el lanzamiento de las campañas presidenciales de Lagos, líder de la izquierda concertacionista, y de Zaldívar, de la DC, para enfrentar las elecciones primarias del 30 de mayo, de donde deberá salir el candidato único de la coalición gobernante para los comicios. En enero también inició su campaña Lavín, alcalde de la acomodada comuna santiaguina de Las Condes y militante de la UDI, único abanderado de la derecha opositora hasta este momento.

El lanzamiento de la candidatura de Lagos se hizo en Montegrande, una modesta y pequeña localidad a unos 450 kilómetros al norte de Santiago, cuna de uno de los premios Nobel chilenos, Gabriela Mistral. Desde el Valle del Elqui, Lagos envió al país un mensaje marcado por el intento de ruptura con el pasado. «Mañana será otro Chile», dice su eslógan con el que trata de proyectar un compromiso con la ciudadanía asentado en los temas del futuro, el crecimiento con equidad social, una democracia plena y una sociedad más abierta y tolerante. También busca una desvinculación con los fantasmas de la Unidad Popular (coalición que llevó al poder a Salvador Allende), fantasmas que ha tratado de levantar la derecha ante el poder de su candidatura, según los expertos en propaganda política. Pero también el discurso de Lagos, favorito en las encuestas electorales, apunta a una desvinculación del caso Pinochet, respecto de quien señaló hace poco que «era necesario darle la espalda». En el terreno de las apelaciones, la estrategia electoral laguista hace énfasis en instalarse dentro del electorado juvenil, con una convocatoria que ha levantado polémica: «Los torturadores también votan. Gánales con tu voto. Unete a la fuerza de Lagos», reza uno de los lemas.

En tanto, la campaña de Zaldívar, que continúa en su cargo en la presidencia del Senado y que no ha logrado superar el 11 o 13% que le dan los sondeos, ha sido más de puertas adentro, tratando de unificar y activar a su partido, el más poderoso de la Concertación. Ello debido a que su baja ubicación en las encuestas sobre preferencias ciudadanas llevó a uno de los viejos caudillos de la DC, Gabriel Valdés, a manifestar que estaba listo para reemplazarlo como candidato. La estrategia del abanderado democristiano para las primarias apunta subliminalmente a contrarrestar a Lagos, definiéndose como un candidato de la «continuidad y la estabilidad», lo que ha generado roces en la Concertación, pues los socialistas acusan a Zaldívar de «hacerle el jue-

go» a la oposición y poner a Lagos como un candidato que introduciría inestabilidad y caos en el país. Una miniconferencia de los encargados de campaña realizada a mediados de enero fijó el marco ético de la competencia, ya que previamente, y en un proceso mucho más rápido de lo que se esperaba y carente de cualquier elemento dramático, la coalición gobernante había fijado las normas que regirán las primarias 1999. Estas serán financiadas por la propia coalición, se harán con el padrón nacional de electores y serán abiertas a todos los ciudadanos, excepto los inscritos en otros partidos que no pertenezcan a la Concertación.

Desde la oposición de derecha, Lavín lanzó su candidatura en el norte chico, concretamente en La Serena, en la misma región y el mismo día que Lagos —al que juró no cederle «ni un kilómetro». Lo hizo en una zona de pobreza extrema, y con un discurso que trata de proyectar su imagen de «hacedor de cosas» y su compromiso con todos los sectores. Bien perfilado en las encuestas aunque sin remontar, con fama de «hombre de hechos», Lavín representa una opción política que lentamente ha ido unificando a la oposición. Sin embargo, a pesar de sus éxitos no consigue convencer a una parte del empresario y la derecha estrechamente vinculada con Pinochet. Felipe Lamarca, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) planteó en una importante reunión empresarial y en presencia de Frei la «necesidad patriótica» de que éste considerara su reelección, para lo que se precisa una reforma constitucional que no tiene ninguna posibilidad legislativa.

Por su parte, el general Pinochet, manejando desde Londres los hilos políticos del conglomerado de derecha, evidenció su voluntad de buscar alternativas en otros sectores para enfrentar el eventual triunfo de Lagos. Así se interpretaron los acercamientos entre aquél y Zaldívar hace pocos meses, y así también el último episodio de este hecho, con el ex-senador democristiano Arturo Frei Bolívar (primo del actual presidente) como protagonista principal, renunciado a fines de enero de la DC a raíz de su visita y apoyo a Pinochet. Frei Bolívar ha levantado una posible candidatura apoyado en las fuerzas de derecha, sobre todo si Lagos gana las primarias.

Según los analistas y a la luz de declaraciones de algunos miembros de la propia familia Pinochet, estas actitudes del pinochetismo tienen su origen en el tímido intento de Lavín de distanciarse hace algunos meses de la dictadura, cuando armó una reunión con familiares de detenidos desaparecidos, lo que fue interpretado como una traición al general. Lavín no ha sido perdonado pese a sus visitas a Londres y a los apoyos manifestados después de la detención de aquél. A esto hay que sumar que algunos sectores lo consideran «liviano» para enfrentar «un peso pesado» como Lagos. Para los partidarios de Lavín la intromisión pinochetista puede resultar fatal, pues por primera vez tienen a sus aliados políticos del PRN a su merced, sin posibilidad de candidato, y están seguros de poder enfrentar con éxito una segunda vuelta electoral, en la que quieren ganar acabando después 10 años de reinado de la Concertación.

## Recapitulando

El año 1998 ha sido un periodo de extrema brusquedad en materia política, repleto de gestos y temas fuertemente vinculados al golpe militar de 1973. Un año que dejó al descubierto, además, una virulencia en las actitudes y lenguaje político que ya se creían superados y en el que reaparecieron los llamados a cruzadas «anticomunistas», amenazas de muerte, presiones e intolerancia. La causa: la prisión del general Pinochet en Gran Bretaña. Sin embargo y pese a ello, el año se cerró con la posibilidad de un recuento positivo, sobre todo porque de alguna manera el país ha sido obligado a mirarse de frente en el espejo, a sostener la vista frente a su verdadera historia. Chile ha hecho de manera individual un gran ajuste en su conciencia histórica, y más allá de que hayan surgido los inevitables disciplinadores de las conciencias, el país experimentó «un salto de ciudadanía» que será beneficioso para el futuro, sea cual sea el resultado del proceso contra el anciano dictador.

La agenda que viene va a tener implicaciones de lo ocurrido estos meses, va a estar salpicada o matizada por los sucesos descritos y exhibidos tan abundantemente por la prensa mundial. No podría ser de otra manera. Sin embargo, el consenso es que no van a influir en el curso estratégico de los acontecimientos. Este curso estará dominado por un año electoral, en el que por primera vez en mucho tiempo la economía será un tema de debate arduo entre el oficialismo y la oposición, y en el que los temas de referencia de la campaña serán la seguridad ciudadana y las cuestiones sociales como la salud, la educación y la cesantía. El tema Pinochet tendrá una proyección simbólica sobre esta agenda, pero quedará subsumido por el creciente perfil electoral que asumirá el año.

Para Pinochet, en cambio, las salidas no son muchas: o regresa a Chile o se va a España a enfrentar el juicio. Ninguna de las dos alternativas depende de su voluntad. Su destino está en manos de la Cámara de Justicia de los Lores, que le puede conceder la inmunidad soberana, lo que le permitiría viajar a Chile, o del ministro británico del Interior, Jack Straw, que ante un fallo adverso de los Lores, tiene facultades para expulsarlo del país por razones de compasión o humanitarias. Straw, que de joven protestó en las calles por el derrocamiento de Allende, también puede acoger, en un proceso que superaría el año, su extradición a España. Según los más agoreros, si se prolonga la estadía de Pinochet en Londres, puede ocurrir lo peor: que una depresión agrave su ya deteriorada salud y se muera fuera de Chile.

Pinochet, según sus allegados, está preparado incluso para no regresar a Chile y morir en Europa, acto que desde su perspectiva, lo igualaría al prócer de la Independencia, Bernardo O'Higgins, quien tras detentar el poder absoluto debió exiliarse en 1823, hasta su muerte en Perú en 1842.